

4

Los generales dicen «okey»

La situación no era buena para Allende porque, mientras él viajaba por diversos países, en Washington, el Latinamerican Desk del Pentágono analizaba lo sucedido durante el paro del mes de octubre, y llegaba a la conclusión de que era necesario planificar, antes de que fuera tarde, «en cooperación con las Fuerzas Armadas chilenas» el derrocamiento de Allende. El Pentágono, a partir de la experiencia de octubre, había llegado a la conclusión que «la insurrección popular en Chile está en el punto de despegue» y hay que impedirle hacerlo. Del mismo modo, estimó que Salvador Allende «ya no estaba en posición de controlar la insurrección popular» y, por eso mismo, resultaba inocuo no contribuir a derrocarlo y reemplazarlo por un régimen duro, de fuerza, que desarticulara la organización de los trabajadores a fin de prevenir el peligro subversivo «desde abajo».

Durante los catorce días que Allende estuvo fuera de Chile, en Washington, los generales del Pentágono, sin consultar o informar a Nixon, su Presidente, decidieron dar «luz verde» para que los generales chilenos intentaran derrocar a Allende de una manera eficaz, drástica y segura.

Cuando en noviembre de 1972 Salvador Allende fue recibido por el general Carlos Prats, Vicepresidente de la República, y le hizo entrega del mando de la nación, ya estaban en la capital los emisarios del Pentágono para iniciar las conversaciones con los generales chilenos dispuestos a intentar la gran aventura militar. Y en esa aventura, por decisión del Pentágono, debía quedar fuera Carlos Prats González. De tal modo que ni Prats ni Allende sabían, el 19 de noviembre de 1972, que los días del Gobierno constitucional estaban contados, y los habían contado en inglés.

Y el asunto no era como para tomarlo en broma. El informe *Octubre en Chile* preparado por el Latinamerican Desk, había sido puesto en la mesa del presidente del cuerpo de generales responsables de divisiones administrativas en el Pentágono, el almirante Thomas Moorer. Y el señor almirante había dado su aprobación a las «conclusiones» del informe.¹

Y los hombres del Pentágono en la Embajada de los Estados Unidos en Chile conocedores en detalle de la situación de las Fuerzas Armadas chilenas, al revés que la CIA que siempre tuvo una sorprendente ignorancia sobre el pensamiento de los altos mandos militares chilenos (lo cual la hizo cometer errores graves tanto en su complot de septiembre-octubre de 1970 como en el de octubre de 1972), se conectaron con «los hombres precisos».

Ya en noviembre de 1972, los enviados del Pentágono hablaban con el general Gustavo Leigh Guzmán, segundo hombre de la Fuerza Aérea; con el vicealmirante José Toribio Merino, segundo hombre de la Marina; con los generales «reformistas» Washington Carrasco, Herman Brady y Sergio Arellano Stark; con los generales «duros» Manuel Torres de la Cruz y Oscar Bonilla; y con el general «constitucionalista» Héctor Bravo Muñoz. Les dijeron escuetamente: Hay que prepararse para derribar a Allende y reemplazarlo por un Gobierno duro, fuerte, que haga trizas la estructura de poder naciente de los trabajadores. Es una carrera contra el tiempo. Se trata de «nuestra supervivencia». Si «el populacho tiene vía libre para seguir el camino de octubre, en un año o dos nos arrollará». Y los enviados del Pentágono establecieron un razonamiento que se esparció, más tarde, como reguero de pólvora por las filas de los altos mandos chilenos. El razonamiento, aproximadamente, era así:

Los informes de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. demuestran que el Perú se está pre-

parando para una guerra con Chile y recuperar las provincias perdidas en la guerra del siglo pasado. De fuentes fidedignas sabemos que los generales peruanos se están armando con blindados pesados y harán compras en la Unión Soviética (por supuesto, los enviados del Pentágono no contaron a los generales chilenos que ellos habían planificado suspender las ventas de armas al Perú, precisamente para obligar a los gobernantes peruanos a reponer su parque en el mercado de la Unión Soviética, y tener así «excusa estratégica» para iniciar una campaña contra el Perú, una vez resuelto el problema chileno). También sabemos que el Perú cuenta con una división aerotransportada para su ataque a Chile, y ha construido una carretera central, muy amplia, de norte a sur, que llega al límite con Chile. El Perú atacará en uno o dos años más, tal vez tres, aprovechándose del momento en que la economía chilena esté destruida por el marxismo. Chile no es la Unión Soviética de 1917, no podrá resistir ese ataque y será vencido. Nuestros cálculos nos señalan eso. Solamente una alianza con Brasil podrá detener «los afanes revanchistas» de los peruanos. Pero el Gobierno brasileño nos ha informado que apoyará a Chile solamente si hay un Gobierno de confianza. Nunca apoyará al actual. La situación es simple: la supervivencia de Chile como nación no sólo está amenazada por el marxismo que quiere conquistarlo totalmente para que sirva de base a la Unión Soviética contra los Estados Unidos y «todo el mundo civilizado», sino también por los enemigos externos que quieren desmembrar su territorio y recuperar las ricas tierras minerales del extremo norte. Perú recibiría el apoyo de Argentina, nosotros (el Pentágono) podríamos sujetar a Bolivia (no sabemos por cuanto tiempo), pero con el Gobierno de Allende funcionando, las Fuerzas Armadas chilenas serían derrotadas. Ustedes (los generales chilenos) comprenderán la responsabilidad que se echan encima al enterarse de estos hechos.

El «informe» del Pentágono fue como un narcótico para muchos generales. Era la «justificación» para participar en la trama para el derrocamiento de Allende. Estados Unidos les había dado una justificación «patriótica» para inclinarlos al lado que temían: de destruir la democracia burguesa chilena. Muy pocos generales pusieron en duda el informe del Pentágono. Entre esos pocos, estaba el general Carlos Prats González, comandante en jefe. La palabra que utilizó para definirlo fue «grotesco».

Pero el general Carlos Prats, en verdad, ya no importaba nada. Después de haberse unido estrechamente, a partir de noviembre, los generales «reformistas» y «duros», existía una mayoría sustancial a favor del derrocamiento de Allende. Por lo demás, la ayuda ofrecida por el Pentágono y su anuncio de que el Gobierno brasileño también estaría a su lado, daba mayores ímpetus a la idea de reemplazar el Gobierno civil por uno militar, «sin plazo fijo de término».

Los generales chilenos, en la reunión final con los enviados del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, hicieron una contraproposición que fue aceptada. Dijeron que darían de plazo a «los organismos constitucionales» chilenos para que derrocaran a Allende hasta marzo de 1973. Si en esa fecha los partidos demócratacristiano y nacional no eran capaces de sacar dos tercios de parlamentarios para destituir al Presidente por simple mandato del Congreso, entonces se prepararían rápidamente para dar un golpe militar eficaz, drástico y masivo.

La maquinaria quedó alineada en su punto de partida.

El fracaso político

En enero de 1973, en la ciudad de Viña del Mar, se reunió la directiva ampliada de la Sociedad de Fomento Fabril. El tema de discusión era obvio: un resumen de la fracasada campaña del año anterior para derrocar al Gobierno constitucional. Se leyó un resumen hecho por las autoridades oficiales del Gobierno, en noviembre de 1972, sobre los efectos materiales del «paro de octubre»:

«El paro patronal de octubre perseguía la caída del Gobierno Popular y en esto fracasó rotundamente. Pero en lo que logró golpear al país fue en sus objetivos económicos. Provocar un desbarajuste en los transportes, en la circulación y en la distribución de los productos de consumo, de las materias primas y combustibles. Pese al esfuerzo de los obreros que mantuvieron en funcionamiento las industrias, pese al empeño de la juventud que suplió con su trabajo voluntario la carga, descarga y movilización de los productos, pese a la protección de las Fuerzas Armadas, el enemigo logró inferir serios e irreparables daños a la economía nacional, a la producción presente y futura.

»Durante los 26 días del paro patronal se perdieron impor-